

## *El surrealismo económico del presidente Flores*

*En la visión del mercado total, toda humanidad se agota en el destino de la maximización de las ganancias. Especialmente, este pensamiento neoliberal puede desentenderse ahora de cualquier compromiso con la vida humana concreta, la que ya no es más que un subproducto de la totalización de las relaciones mercantiles. Toda la moral se disuelve en la vigencia de las relaciones mercantiles, y la justicia social consiste en la adhesión a esta aproximación fantasmagórica hacia el mercado total. Desemboca en la negativa más profunda del derecho a la vida de los hombres*  
Franz Hinkelammert, *Crítica a la razón utópica.*

“Que Dios nos continúe guiando a todos” dijo el presidente Flores al final de su discurso de evaluación de su cuarto año de gobierno. “Amén...” fue la respuesta dada al unísono por líderes campesinos de Chalatenango, que escucharon con atención el discurso, socializado en mesas de trabajo y talleres de la región. El humor popular ante la retórica política ya forma parte de la idiosincrasia campesina, la más crítica hacia la imagen de éxito que difunde el gobierno. Tristemente, estas reacciones son signos de la desesperanza en que se sumerge la mayoría de salvadoreños, que se encuentra dentro del círculo vicioso de la pobreza estructural. La realidad económica y social de El Salvador, desde la perspectiva del primer jefe de Estado, ha dejado de ser una realidad tangible y se enmarca más bien en el ámbito de lo imaginario.

Por esta razón, para quienes escucharon o leyeron dicho discurso denominado “Informe del IV Año de Labores”, pronunciado por el Presidente de la República, el primer día del mes de junio de 2003, no hubo espacio para dudas. Según el mandatario, El

Salvador, en los últimos cuatro años, ha avanzado más que en cualquier período de su historia, en todos los ámbitos sociales y económicos. Su discurso fue una apoteosis sobre el “sinónimo de éxito en cualquier campo”, en que se ha convertido el país, gracias a su “exitoso programa de combate a la pobreza” y a la “transparencia y efectividad” de su gobierno. Esto, a su vez, ha hecho que por primera vez el país sea tomado en cuenta “como actor importante en la comunidad internacional”.

Cabe destacar que el gobierno tuvo que sufrir el efecto negativo de interferencias exógenas, tales como la tormenta tropical “Mitch”, los terremotos de 2001 y las crisis propias de la desaceleración económica mundial. No obstante, el calificativo de *surrealismo económico* resulta justificado, porque el discurso presidencial no es real. Se basa en relaciones estadísticas superficiales del ámbito económico y social del país. El supuesto éxito de la “estabilidad macroeconómica” y el “rostro humano” de las políticas socioeconómicas implementadas, resulta incongruente cuando se mide el débil bien-

estar microeconómico alcanzado con enorme esfuerzo por las familias salvadoreñas. Todos pierden cuando se esconde artificiosamente la realidad, pues de un mal diagnóstico se siguen malas políticas para mejorar las verdaderas condiciones de vida, en las cuales vive la mayoría de la población. ¿Cuáles son los “éxitos” de los que se ufana Flores? El problema del gobierno es no reconocer, ni siquiera en su expresión mínima, los fracasos y fallos del modelo económico, implementado desde 1992 hasta la fecha. Si el discurso del presidente Flores fuera cierto en su totalidad, se tendría que haber elevado el nivel de vida y de bienestar de la población como nunca antes. ¿Es esto cierto?

### 1. La pobreza sigue siendo estructural

No hay que perder de vista que la pobreza es un fenómeno *multidimensional*, y cuando es de carácter estructural como lo es en El Salvador, erradicarla, o al menos aproximarse a esa meta, implica al menos tres cosas: distribución del ingreso, crecimiento de la economía y modificar el enfoque y hacer más eficientes las políticas públicas. Así, para erradicar la pobreza en El Salvador, tendría que cambiar sustancialmente la desigual distribución del ingreso que experimenta el país, dinamizar el débil y estéril crecimiento de la economía para generar nuevos y mejores empleos, y repensar las políticas públicas como parte de un verdadero plan de nación, con objetivos y acciones coherentes para asegurar el camino al desarrollo, en el largo plazo.

Estas premisas parecen superfluas y vacías ante las afirmaciones del gabinete de gobierno. Las políticas públicas tendrían que haberse orientado a atacar las causas de la pobreza estructural y esto es algo que el gobierno no ha hecho. Las razones son sencillas. El modelo económico implementado ha tenido como objetivo primario aumentar la riqueza de una minoría de empresarios, vinculada a las finanzas y al comercio. Es una verdad fáctica que, históricamente, las estadísticas de pobreza en

El Salvador han sido altas y, a su vez, que las de inversión han sido mínimas. Según estudios recientes de FUSADES (2002), en El Salvador “una de cada dos personas vive en pobreza, de las cuales una porción sustantiva no puede cubrir sus necesidades de alimentación”<sup>1</sup>. Esta realidad se reproduce en el país año con año, sobre todo en el sector rural y en las zonas marginales urbanas, por lo que contrasta con lo afirmado por el presidente Flores, en su discurso, cuando dice que “la seguridad alimentaria de nuestros campesinos está garantizada”. Esto es más que discutible. Ni la pobreza, ni la seguridad alimentaria<sup>2</sup> de los pobres están aseguradas, máxime en el sector rural, donde las condiciones de vida son sumamente precarias.

En El Salvador, la seguridad alimentaria se encuentra lejos de ser una realidad para todos los ciudadanos. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su informe *El estado de la inseguridad alimentaria del mundo 2001*, El Salvador ha registrado durante toda la década de los noventa una fluctuante, pero creciente población en constante riesgo de inseguridad alimentaria, la cual ha aumentado año con año hasta alrededor 700 mil personas<sup>3</sup>. Para el período 1996-1998, todavía el 7 por ciento de la población total sufría de subnutrición<sup>4</sup>, es decir, 649 mil personas, aproximadamente. Más reciente, solo para mayo de 2002, el Programa Mundial de Alimentos señaló la urgencia de rescatar de ese subconjunto de personas en subnutrición a aquellas en completo peligro de inanición: 50 mil familias con claros signos de inseguridad alimentaria extrema<sup>5</sup>.

Esto se explica en parte por la vulnerabilidad propia de los pobres, sobre todo en los sectores rurales, porque para asegurar la seguridad alimentaria de los campesinos son necesarios empleos rurales dignos y esto es, precisamente, lo que no se ha logrado. El problema es que no ha habido políticas sectoriales claras de parte del gobierno para proteger y apoyar a los sectores productivos básicos de la

1. Anabella Lardé Palomo, Roberto Rivera Campos, “Informe de desarrollo económico y social 2002: invirtamos en educación para desafiar el crecimiento económico y la pobreza”, San Salvador, FUSADES, 2002.
2. Según la FAO, la seguridad alimentaria es la situación que se da cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. <http://www.fao.org/docrep/x8200s/X8200S06.htm>.
3. El informe intenta reflejar la evolución del hambre en los períodos 1990-1992 y 1997.
4. Subnutrición es la ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua. *Ibid.*
5. *La Prensa Gráfica*, 29 de mayo de 2002.

población, como lo es la agricultura. Si en 1997 se habían generado 165 mil empleos solo para el sector de la caficultura, en el año 2002, esta cifra cayó hasta apenas 54 mil empleos. Si siempre se ha sabido de las fluctuaciones en los precios de los sectores agrícolas como el café, ¿qué se ha hecho para garantizar las condiciones mínimas de vida de los campesinos afectados cuando esas fluctuaciones son a la baja? ¿Qué seguridad alimentaria va a tener toda esta población sin empleo y sin opciones, en el sector rural?

Por otro lado, es importante señalar que, en El Salvador, las mediciones sobre la pobreza ocultan su verdadera dimensión y restringen este nivel a expresiones “enanás”, ya que no alcanzan a explicar las múltiples manifestaciones de un fenómeno tan extendido en el país. Así, tenemos que la determinación de la *línea de pobreza* se basa en una aproximación a una sola piedra angular: el costo de la canasta básica alimentaria (CBA)<sup>6</sup>. El problema es que la línea de pobreza trazada tal y como lo estableciera el Ministerio de Planificación, en el gobierno de Cristiani, reduce sustantivamente el universo de lo que se entiende por *pobreza*, desde su misma concepción teórica, puesto que se concentra en una sola de las aristas, que componen la realidad de una persona calificada de “pobre”. Esto es peligroso, pues puede llevar a diagnósticos erróneos sobre la verdadera situación del país, en materia de niveles de pobreza y, por ende, a un ejercicio poco óptimo de las políticas públicas.

En este sentido, un problema teórico de incoherencia es clasificar a la “pobreza extrema” solamente como aquella que padecen personas que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria y a quienes viven en “pobreza relativa” a aquellos que no alcanzan a cubrir dos veces ese cos-

to. Empero, esta clasificación es muy sesgada y miope. Se ha demostrado que la pobreza es mucho más que eso. Es una restricción de oportunidades y capacidades, en todos los niveles, que van desde la incapacidad para acceder a viviendas dignas, salud, educación, hasta incluir aspectos como el acceso a actividades de esparcimiento, etcétera, es decir, la satisfacción básica de una multiplicidad de necesidades humanas mínimas<sup>7</sup>.

Las necesidades que se deben satisfacer ponen sobre el Estado una exigencia enorme, más aún para un país como El Salvador, donde se experimenta una extrema desigualdad de la riqueza y las políticas públicas, en vez de aminorarla, no hacen más que empeorarla. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la *distribución del ingreso* es uno de los campos donde el país destaca, pero en sentido negativo, puesto que El Salvador ha alcanzado uno de los primeros puestos en la escala de economías más desiguales de América Latina, lo cual no es nada alentador, puesto que dicha región es, a su vez, “la más desigual de todas las regiones del mundo”<sup>8</sup>.

La desigualdad vivida en El Salvador, pues, no es normal, ni aceptable. Su procedencia tiene raíz en una lacerante injusticia estructural y se convierte en un obstáculo para el desarrollo. No es físicamente posible que un modelo económico pueda llevar al desarrollo cuando una elite económica, que representa apenas el 5 por ciento de la población, recibe una cuarta parte del ingreso total de la nación, mientras que el 30 por ciento más pobre recibe solo el 6 por ciento del ingreso total<sup>9</sup>. Estos extremos son intolerables, ¿pero qué ha hecho el gobierno para revertir esta situación? En la práctica nada, puesto que la mayoría de sus políticas públicas tienen carácter regresivo y han deteriorado la capacidad ad-

6. Esta misma se creó y se determinó su composición sobre la base de una encuesta de ingresos y gastos, llevada a cabo por el Ministerio de Planificación, en 1991. De esta manera, se dictaminó cuáles eran los alimentos más consumidos, en ambas áreas —urbana y rural— para establecer una canasta que provee 2200 calorías diarias.
7. Según la perspectiva originada por los aportes teóricos de Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 1998, la situación de “falta de desarrollo” es más el producto de una privación de las capacidades básicas de las personas que simplemente de bajos ingresos. De hecho, para Sen, el desarrollo humano sería el proceso de expandir el universo de opciones u oportunidades, a las cuales pueden acceder las personas, principalmente, en términos de vivir una vida larga y saludable, recibir educación y tener ingresos o recursos suficientes para sostener un nivel de vida decente. De ahí el nacimiento del índice de desarrollo humano (IDH), utilizado por Naciones Unidas.
8. NUD (1999), “Estado de la nación en desarrollo humano 1999”.
9. Banco Interamericano de Desarrollo (1998), “América Latina frente a la desigualdad”, *Progreso económico y social, Informe 1998-1999*, citado en el *Informe de Desarrollo económico y social 2002*, FUSADES.

quisitiva de las personas. De hecho, tal y como lo refleja la evolución del coeficiente de Gini<sup>10</sup> de El Salvador, la concentración del ingreso se ha mantenido invariable, en toda la década. Resulta suficiente observar cómo este indicador permanece estático durante casi la totalidad de los quince años de gobierno del Partido ARENA, siendo que en 1992, el coeficiente era de 0.52; en 1996, de 0.52, y en 2000, empeoró un punto más hasta 0.53<sup>11</sup>.

Ante estos desequilibrios, es comprensible por qué se ha comenzado a observar en las encuestas de opinión un latente malestar entre quienes sufren los efectos de la cara oscura del modelo económico neoliberal, quienes, además, han adquirido conciencia de que pocos centralizan y concentran toda la generación de riqueza en el país. Esta “argolla dorada” del poder económico es tan reducida, que quienes la conforman pueden incluso identificarse por nombre y apellido, ya que controlan las esferas económica y política, y se han convertido en lo que Carlos Paniagua llamó el “bloque hegemónico empresarial salvadoreño”.

El país experimenta leves crecimientos económicos cada año, pero ¿de qué sirve a las familias ese crecimiento que el poder ejecutivo celebra? El problema es que la economía salvadoreña históricamente ha crecido, en los últimos cuarenta años, a una tasa promedio del 3 por ciento anual, una tasa a todas luces insuficiente para incidir en la disminución de la pobreza, dado que la población, en el mismo período, ha crecido a una tasa promedio superior al 2 por ciento. Para poder superar la pobreza, en el transcurso de las próximas dos décadas, se requeriría, según diversos economistas, sostener tasas de crecimiento del PIB de al menos el 6 por ciento.

Por otro lado, la concentración del poder económico esteriliza el crecimiento, puesto que, por estar concentrado, no genera una lógica de verdadero desarrollo para toda la población. Es la lógica

perversa señalada por FUNDE —en “Crecimiento estéril o desarrollo”<sup>12</sup> (1997)—. El crecimiento económico es clave para alcanzar el desarrollo, pero incluso si se llegara a alcanzar, no es concluyente, porque lo que importa es si lo acumulado es distribuido *equitativa y eficientemente*. Aquí estamos ante uno de los prerrequisitos no cumplidos por los gobiernos de ARENA. Sin ello, es imposible garantizar una plataforma básica para gestionar, a través de las políticas públicas, la disminución de la pobreza.

El “reconocimiento internacional” y el “símbolo de éxito” en que se ha convertido El Salvador y del cual el presidente Flores hace alarde, ha generado un optimismo exagerado, puesto que no se corresponde con la realidad. El sesgo en el crecimiento desigual que han impulsado las políticas públicas de los tres gobiernos de ARENA es notable. El Salvador ha concentrado su interés en el crecimiento en los sectores donde la rentabilidad es más dinámica, dejando de lado al sector agropecuario. Esto ha generado una emigración del campo hacia las ciudades, donde la gente cree encontrar las oportunidades negadas en lo rural. De ahí que la población urbana haya crecido de un 47.9 por ciento, en 1992, al 60 por ciento de la población total hasta la fecha, aproximadamente. El cambio es enorme. La pobreza rural es mayor cuanto más alejado se está de los centros urbanos. Este abandono en que se encuentra el sector agropecuario se refleja en estadísticas como las señaladas por FUSADES, según las cuales, por ejemplo, el 20 por ciento de los hogares rurales más alejados de los sectores urbanos tarda casi dos horas en llegar a la carretera pavimentada más cercana<sup>13</sup>.

Siguiendo esta lógica, de poco sirve congratularse por el enorme flujo de remesas percibidas, porque quienes las envían, más que “hermanos lejanos”, son *exiliados económicos* del modelo capitalista neoliberal vigente en El Salvador. Resulta una verdad ineludible que es la falta de oportuni-

10. Para medir la *concentración del ingreso* se utiliza como estándar internacional, el índice de Gini, el cual representa en un solo índice toda la información sobre las participaciones en el ingreso de todos los grupos de población, generando un indicador que puede variar entre cero (perfecta distribución del ingreso) y uno (total concentración en una sola persona). En la práctica, este indicador fluctúa entre 0.25 (los más equitativos en la distribución del ingreso) y 0.60 (los países de mayor desigualdad en distribución del ingreso).

11. *Op. cit.*

12. Roberto Rubio Fabián, Joaquín Arriola, José Víctor Aguilar, *Crecimiento estéril o desarrollo: bases para la construcción de un nuevo proyecto económico en El Salvador*, San Salvador, 1997.

13. Encuestas de Hogares Rurales, BASIS /FUSADES, 1998.

dades para superar la pobreza, obtener un empleo digno y asegurar las vidas de las familias salvadoreñas lo que ha movido a la emigración hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia otros países. Año con año, El Salvador deteriora su fuerza productiva al “exportar” unos 72 mil salvadoreños al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Mientras tanto, aquellos que no tienen la oportunidad de engrosar el flujo migratorio legal o ilegal hacia el norte, se tienen que resignar con los empleos de pocos ingresos y condiciones precarias, como los de la maquila, o entrar a formar parte del creciente sector de los subempleados, que conforman el sector informal urbano.



Los datos económicos y sociales revelan los desequilibrios del país. En 2000, la pobreza alcanzaba al 70 por ciento de la población de Cabañas, el departamento más pobre, y únicamente al 31 por ciento de la población de San Salvador, el departamento con menor pobreza. ¿Quiénes son, entonces, los que se benefician, en realidad, con las políticas públicas de ARENA? No hay duda que en el libre juego de mercado, estimulado con las reformas económicas neoliberales, ha habido ganadores y perdedores. Como observa FUNDE, FUSADES y otros centros de investigación económica, la reducción de la pobreza de los noventa obedeció, más que a un éxito de la gestión económica, a una externalidad positiva, relacionada con el dinamismo de las inversiones generado por los acuerdos de paz. Pero la clave está en distinguir que dicha disminución no provino de cambios en la distribución del ingreso, y, por tanto, perdió su fuerza en el transcurso de la década. Así, ha habido crecimiento económico en la zona central urbana, es decir, donde se ha concentrado el capital comercial y financiero.

A fin de cuentas, es claro que la pobreza no puede ser vencida si no se rompe con este círculo vicioso. Y eso no puede lograrse con paliativos, orientados a disminuir la presión social de los marginados. Las estadísticas de inversión en educación, salud y vivienda no se traducen en beneficios sensibles, si la población no tiene lo mínimo para comer. De ahí los altos niveles de deserción de estudiantes en el nivel básico, quienes se ven forzados a buscar algún tipo de trabajo; o las protestas sociales que demandan derechos básicos,

como un salario decente y digno. El factor exógeno que ha contribuido a apaciguar el malestar causado por la pobreza son las remesas, lo cual, más que un consuelo, es el síntoma de una enfermedad en expansión, es decir, se ha convertido en el mejor ejemplo de una pésima gestión económica y social.

## 2. Avances sociales: tan lejos y tan cerca de la senda correcta

En el gobierno actual se han dado ciertos avances en materia social. El Salvador, en efecto, ha mejorado levemente su índice de desarrollo humano. Según datos del PNUD, para el año 2003, El Salvador ya se encuentra en el puesto 105 y, por ende, a 48 escaños de las naciones consideradas desarrolladas, es decir, ha avanzado dos posiciones con respecto a 2002. Sin embargo, estos logros no son suficientes para satisfacer las grandes necesidades de la población. En este sentido, el gobierno actual no ha traído cambios sustanciales en la lógica del desarrollo. Las obras sociales se convierten en satisfactores sociales, pero no son parte de un plan estratégico integral de desarrollo.

Básicamente, lo que impide que el gobierno avance con mayor ímpetu hacia el desarrollo humano sostenible es el capital social deteriorado y las externalidades negativas, propias de un modelo económico donde se libera al Estado de sus responsabilidades y donde ese espacio de bienestar público es cedido a la lógica del mercado y la maximización de ganancia. En otras palabras, tal como lo expresó el coordinador del PNUD, William Pleitez,

"tenemos de las mayores libertades económicas, pero a pesar de que los inversionistas nos ven como un país competitivo, la productividad del trabajo es baja porque los niveles educativos son bajos y no podemos competir por falta de capacitación"<sup>14</sup>. Si en el país subsisten un 1,393,214 personas con menos de un dólar al día, es decir, el 21.4 por ciento de la población, ¿cómo puede un gobierno declararse victorioso en el combate a la pobreza y considerarse un "ejemplo internacional" de desarrollo humano sostenible? Países como Costa Rica y Cuba, con ingresos similares a los de El Salvador, superan por un poco más del doble los niveles de bienestar social de los últimos índices de informe de desarrollo humano de El Salvador.

Al desglosar las diferentes variables del bienestar social, resulta que los avances han sido positivos, en algunos casos, esto es, el gobierno ha caminado por la senda correcta. Sin embargo, al hacer la sumatoria y compararlo con los niveles hipotéticos necesarios para abrir el camino hacia el desarrollo, se quedan cortos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de menores de un año era de 30.7 por mil nacidos vivos, en 1999; en 2002, fue de 27.4 por mil nacidos vivos. Esto refleja un cambio de 3.30 por mil nacidos vivos. El avance es pequeño, pero al menos es positivo. Otro avance positivo se da en la erradicación de los factores de la mortalidad infantil, en los niños menores de un año. Pero esta tendencia muestra que los avances son mediocres, pues no se puede decir nada sobre la esperanza de vida al nacer, la cual, en la práctica, se encuentra estancada desde 1998. En 1999, esa esperanza era de 69.7 años. En 2002, era de 70.4 años. Aquí, las niñas son las que se encuentran mejor ubicadas. Por lo tanto, se puede afirmar que, en términos generales, el indicador no ha experimentado una mejora relevante.

Por otro lado, la calidad de la vivienda ha cambiado en los últimos años, a causa de los terremotos de 2001. No se nota un cambio importante en el tipo de vivienda de concreto, en los últimos años. En 1999, alrededor del 62.5 por ciento de viviendas era de concreto mixto. En 2002, el 67.7 por ciento tenía la misma característica. Durante estos años, únicamente se ha experimentado un cambio del 5 por ciento. Es interesante observar que se ha dado un decrecimiento de alrededor del 10 por ciento, en el tipo de vivienda de bahareque y adobe.

Sin embargo, esto lleva a pensar que si bien la mitad de estas familias ha podido adquirir una casa de cemento, la otra mitad posee una más precaria —de lámina, madera o paja, entre otros.

El acceso al agua es desigual, sobre todo entre el sector urbano y el rural. Según los datos de DIGESTYC, en términos generales, el abastecimiento de agua por cañería aumentó, al pasar de un 66 por ciento, en 1999, a un 75.9 por ciento, en 2002; pero, por otro lado, este servicio en el sector rural se mantuvo, en promedio, a menos de la mitad del nivel accedido en el sector urbano, en el período 1999-2002. Además, esta tendencia se ha mantenido constante, tal como lo demuestran las estadísticas. Si en 1999, el 85.6 por ciento de la población accedía a agua por cañería y apenas el 35.6 por ciento lo hacía en el sector rural; en 2002, esa tendencia se repite en un nivel casi imperceptiblemente mejor, el 92.6 por ciento de la población ya tenía acceso al abastecimiento de agua por cañería, mientras que en el sector rural solo el 47.6 por ciento tiene acceso a este servicio.

En educación, la situación también es ambigua. Ciertamente, se ha avanzado en el desarrollo del programa educativo, pero los niveles efectivos alcanzados distan mucho de lo deseable, dadas las necesidades para romper el círculo vicioso de la pobreza. Los niveles actuales de gasto en educación como porcentaje del PIB, aún no superan los de más del 3.5 por ciento, alcanzados a finales de los años setenta. En consecuencia, El Salvador se mantiene entre aquellos países que gastan menos en educación de lo que le correspondería, de acuerdo a su ingreso per cápita. Así, según datos del PNUD, países con ingresos per cápita similares a El Salvador gastan en educación el 4.2 por ciento del PIB, en promedio, es decir, 40 por ciento más de lo que el gobierno de ARENA dedica en la actualidad.

Por último, en salud es una verdad indiscutible que el gasto social está lejos de ser óptimo deseable para garantizar este bien a la gran mayoría de la población. La recién finalizada huelga del sector salud revela que todavía la salud es un problema de múltiples crestas. Por otro lado, lo que se destina al sector salud, específicamente a la salud preventiva, es síntoma de la erosión de la calidad y accesibilidad al servicio. El gasto apenas asciende a alrededor del 30 por ciento del presupuesto

14. *La Prensa Gráfica*, 9 de julio de 2003, p. 63.

del ramo, contra casi un 60 por ciento destinado a la atención curativa, a través de hospitales públicos. Esto evidencia que la mayor proporción de los escasos recursos del Ministerio de Salud se destinan a soluciones de alto costo.

### 3. La frágil estabilidad económica

En el discurso del 1 de junio, el presidente Flores señaló los grandes avances socioeconómicos experimentados durante su gestión. Según el mandatario, los principales éxitos de su gobierno son la seguridad social —vivienda, educación, salud, agua potable, vivienda, entre otros—, aunque el aumento cuantitativo no se refleja en la calidad, ni en la eficiencia necesarios para el desarrollo. En materia económica, habría logrado la estabilidad del país, a través de una serie de políticas, como la dolarización. Según el discurso, el país está próximo a entrar en una etapa de desarrollo sostenido, apoyado en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual es muy discutible. El tono triunfalista del discurso es más acentuado en el campo de la gestión macroeconómica.

Los contrastes son evidentes sobre todo en materia social, donde lo dicho por el presidente Flores dista mucho de la realidad vivida en muchas comunidades urbanas y rurales. Ahí servicios básicos como agua potable y energía eléctrica no son una realidad. En el ámbito económico, el presidente ignora los momentos difíciles por los que pasa la gran mayoría de salvadoreños, quienes, en los últimos años, han visto cómo se esfuma la capacidad adquisitiva de sus salarios.

Este discurso muestra el estilo de gobierno del presidente actual, distante, indiferente y poco conocedor de la realidad del país. Los avances en la serie de promesas que hizo hace cuatro años son a medias; hay áreas donde se observa un franco retroceso —las recientes reformas propuestas para aliviar el malestar social manifestado en la derrota electoral de ARENA, en las elecciones de diputados y alcaldes de 2003—. La estrategia socioeconómica actual parece encaminarse más bien a paliar la marginalidad de los perdedores del libre mercado, es decir, los más pobres, con reformas de carácter caritativo y populista. De ahí que, reformas como la reciente alza del salario mínimo, son, en lo fundamental, producto de la debacle electoral del 16 de marzo.

El desempeño económico del país durante el cuarto año del gobierno de Flores es, en términos generales, similar a del año anterior. Persisten la reducción de las tasas de crecimiento económico, el incremento en los desequilibrios de la balanza comercial y el siempre concomitante problema fiscal, entre otros. Como dato interesante, en el tercer año de su gobierno, Flores eliminó los subsidios a algunos servicios básicos. Pero al finalizar el cuarto año, ha restablecido algunos de los subsidios suprimidos un año antes, para garantizar que el partido oficial pueda continuar en el poder ejecutivo cinco años más. Una de las críticas más repetidas, al concluir este cuarto año, es la ausencia de una política social efectiva. Varios expertos en el campo económico —FUSADES y algunas clasificadoras de riesgo— han percibido que el manejo de la economía no ha sido el más apropiado y que de continuar con los desequilibrios fiscales, el país podría experimentar una crisis peor de la que ya atraviesa. Este aspecto es preocupante, porque en otros años se había dicho que el gobierno de Flores y, en general, los gobiernos de ARENA medían sus logros solo en función del desempeño de algunas variables macroeconómicas importantes, dejando de lado los aspectos sociales. Sin embargo, en este año, el gobierno ha sido cuestionado por algunos desatinos de su política económica.

El gobierno de Flores, por otro lado, para proteger la economía nacional se ha esforzado por aproximarla a la economía de Estados Unidos. Así los procesos económicos nacionales están cada vez más determinados por el comportamiento de la economía norteamericana. Primero fue la Ley de Integración Monetaria y luego viene el tratado de libre comercio. Si el plan llega a concretarse, el crecimiento económico salvadoreño dependerá del desempeño económico de la economía estadounidense. De momento, es evidente que la dolarización no ha podido reactivar la economía salvadoreña. Tampoco ha facilitado el acceso a crédito más barato. De hecho, el crédito del sector privado está estancado, exceptuando los últimos meses del año 2002. Entre 1999 y 2002, la tasa de crecimiento económico sostenido fue cercana al 2 por ciento, mientras que el crecimiento demográfico es del 1.9 por ciento, en el mismo periodo. Esto significa, en términos generales, que el PIB per cápita, en la práctica, ha estado estancado en los últimos años.

En el sector externo se sobredimensionan los logros. Es cierto que las exportaciones han crecido, en los últimos años, pero no como para compensar el crecimiento desproporcionado de las importaciones. Entre 1999 y 2002, las exportaciones crecieron en un 19 por ciento, aproximadamente. Pero las importaciones crecieron, en el mismo periodo, el 26.7 por ciento. Este déficit en la balanza comercial ha crecido mucho durante el tercer gobierno de ARENA. El país ha cumplido con sus obligaciones respecto a la deuda externa, pero ésta muestra una tendencia a aumentar. Entre 1999 y 2002, esa deuda creció en el 48.1 por ciento. Por otro lado, la deuda del gobierno central, no obstante ciertos intentos de austeridad, creció el 50 por ciento, en los mismos años. Los expertos señalan que la tendencia puede poner en peligro la buena clasificación financiera del país.

En estas circunstancias, el tercer gobierno de ARENA tiene poco margen de maniobra. No cuenta con una política monetaria para intentar dinamizar la economía. Tampoco tiene voluntad política para implantar una política fiscal expansiva. Ni podría

reactivar la economía por el lado del gasto público, porque entonces aumentaría el endeudamiento público. Ahora bien, la única alternativa con la que cuenta el gobierno salvadoreño es la política fiscal, pero para que ésta tenga resultado son indispensables unas finanzas públicas sanas, además de voluntad política. Sin embargo, el gobierno de ARENA coloca sus esperanzas en el tratado de libre comercio con Estados Unidos sin percatarse que la apertura descontrolada del mercado nacional podría afectar a sectores productivos importantes.

La visión económica del presidente Flores, tal como aparece en su discurso del 1 de junio, es tradicional. Si para Cristiani y Calderón, El Salvador se encontraba en camino hacia el desarrollo; para Flores, El Salvador estaría a las puertas del desarrollo sostenible. Nada puede estar más alejado de la realidad. El país necesita de la participación activa del Estado y de un gobierno que impulse políticas sociales vigorosas y eficaces.

**Carlos Zepeda y Rommel Rodríguez**

